

Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que don Sergio Valenzuela Mena, abogado, en representación de la reclamante Universidad Austral de Chile, en autos sobre reclamación de multa, seguidos ante el Juzgado del Trabajo de Valdivia, dedujo recurso de queja en contra de los integrantes de la Primera sala de la Corte de Apelaciones de la misma ciudad, ministros señores Luis Aedo Mora y Samuel Muñoz Weisz, y abogado integrante señor Luis Galdames Bühler, porque -en su parecer- dictaron con falta y abuso grave la resolución de 13 de julio de 2022, que confirmó la de primera instancia que declaró la caducidad de la acción de reclamación de multa.

Explica que al resolver los recurridos no respetaron la regulación que al efecto disponen los artículos 8 de la Ley N° 21.226 y único de la Ley N° 21.379, configurando un vicio que afecta la garantía establecida en el inciso 6°, numeral 3°, del artículo 19 de la Constitución Política de la República, relativa a un justo y racional proceso, atendido que se ha denegado el derecho a que el tribunal se pronuncie sobre el fondo del asunto, lo que no ocurrirá si se declara la caducidad por equivocadas razones, sin aplicar la ley que resuelve el caso.

Segundo: Que, al evacuar el informe, los recurridos señalan que para resolver compartieron las razones que tuvo el tribunal del grado, agregando que más que denunciar un error o descuido flagrante y manifiesto, el recurrente trata de demostrar una interpretación jurídica distinta a la que sostuvo la magistratura.

Tercero: Que, el recurso de queja se encuentra contemplado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, que trata "De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales", y está reglamentado en su párrafo primero que lleva el epígrafe de "Las facultades disciplinarias".



Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, al efecto, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a un debido proceso o a la tutela judicial efectiva.

Sexto: Que, del examen de los antecedentes obtenidos del sistema computacional se advierte que:

a).- El 17 de febrero de 2022 la quejosa interpuso reclamación en contra de multa administrativa. En dicho libelo manifestó que la decisión impugnada le fue notificada el 16 de noviembre de 2021.

b).- El tribunal a quo acogió la excepción de caducidad opuesta por la reclamada atendido "*que la demanda se interpuso el 17 de febrero de 2022, por tanto, conforme a cualquiera de las interpretaciones ya referidas, el plazo de 15 días hábiles contemplado en el inciso 3° del artículo 503 del Código del Trabajo ya había vencido*".

c) Con fecha 13 de julio de 2022 los recurridos confirman la resolución en alzada.

Séptimo: Que, para una adecuada resolución del recurso interpuesto, es necesario indicar que el artículo 8° de la



Ley N° 21.226, establece que: "Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, se entenderá interrumpida la prescripción de las acciones por la sola presentación de la demanda, bajo condición de que esta no sea declarada inadmisibile y que sea válidamente notificada dentro de los cincuenta días hábiles siguientes a la fecha del cese del referido estado de excepción constitucional, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso, o dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último. No será aplicable lo dispuesto en el inciso anterior para el ejercicio de las acciones penales. Asimismo, no aplicará lo dispuesto en el inciso primero de este artículo para el ejercicio de las acciones laborales y de competencia de los juzgados de policía local, en cuyo caso se entenderán prorrogados los plazos de prescripción y de caducidad respectivos, hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, declarado por Decreto Supremo N° 104, de 18 de marzo de 2020, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y el tiempo en que este sea prorrogado, si es el caso. Durante la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, a que se refiere el inciso primero, la presentación de la demanda podrá realizarse sin necesidad de acreditar el cumplimiento de la mediación previa obligatoria, o cualquier otra exigencia, cuyo cumplimiento se torne difícil de satisfacer, en razón de las restricciones impuestas por la autoridad o de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria, como es el caso de la reclamación y la conciliación del artículo 497 del Código del Trabajo ...".

Octavo: Que, por otro lado, el artículo 503 del Código del Trabajo expresa, en lo pertinente: "La resolución que



aplique la multa administrativa será reclamable ante el Juez de Letras del Trabajo, dentro de quince días hábiles contados desde su notificación. Dicha reclamación deberá dirigirse en contra del Jefe de la Inspección Provincial o Comunal a la que pertenezca el funcionario que aplicó la sanción”.

Noveno: Que del tenor del artículo referido en el considerando séptimo cabe señalar que la ley contempla tres instituciones relacionadas con el plazo y su eventual extensión:

1°.- La interrupción de la prescripción, en cuya virtud todo el tiempo transcurrido se va a perder en la medida que se realice una determinada actuación como es el caso de la presentación de la demanda a que se refiere el inciso primero del artículo 8° respecto de la generalidad de los procedimientos civiles. En este caso, para otorgar eficacia a la interrupción deben cumplirse las siguientes “condiciones” o sobrellevarse las siguientes cargas: a.- La demanda presentada no debe ser declarada inadmisibile, y, b.- Que sea válidamente notificada: b.1.- Dentro de los cincuenta días hábiles siguientes al 1° de diciembre de 2021, o b.2.- Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que la demanda fuere proveída, lo que suceda último.

2°.- La segunda institución es la suspensión que implica la paralización del tiempo transcurrido mientras se mantenga el impedimento. A esta institución se referían el derogado artículo 6°, el artículo 7° y el vigente artículo 12. Terminado el impedimento los plazos comienzan a contarse o continúa su cómputo.

3°.- La tercera institución es la prórroga de los plazos de caducidad y de prescripción. Cabe tener en consideración que “prorrogar”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, significa, en su primera acepción “continuar, dilatar, extender algo por un tiempo determinado” ; la segunda la equipara a “suspender”, pero tal concepto no se condice con la institución de la suspensión. Si lo es, por el contrario, la locución “aplazar”, en efecto, un plazo es



prorrogable cuando se puede extender más allá de su vencimiento natural.

Décimo: Que, por su parte, la Ley N° 21.379 publicada el 30 de septiembre de 2021 estableció que, con excepción de lo dispuesto en los artículos 4 y 6, cada una de las disposiciones de la Ley N° 21.226 que se referían a la vigencia del estado de catástrofe y al tiempo en que éste sea prorrogado "ha de entenderse que las respectivas reglas refieren al término que se extiende hasta el 30 de noviembre de 2021" (artículo 11, inciso 1°).

Undécimo: Que teniendo en consideración que la Resolución 4499/21/37, de 12 de noviembre de 2021, fue notificada -según indica el quejoso en su reclamo- por correo electrónico el 16 del mismo mes y año, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 503 del Código del Trabajo venció naturalmente el 7 de diciembre de 2021, esto es, siete días después de la fecha de término del estado de excepción constitucional de catástrofe, en tanto que el reclamo fue deducido el 17 de febrero de 2022.

Duodécimo: Que, sobre la base de lo anterior, aplicando la prórroga de plazo a la situación de autos, el quejoso podría haber presentado su reclamación hasta el 31 de enero de 2022, con lo cual obtenía una extensión de cuarenta y siete días adicionales al vencimiento natural del término en el que debía formular su pretensión. En consecuencia, al haber presentado la reclamación el día 17 de febrero de 2022, el plazo para interponerla se encontraba vencido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, **se rechaza el recurso de queja** deducido en contra de los integrantes de la Primera sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, ministros señores Luis Aedo Mora y Samuel Muñoz Weisz, y abogado integrante señor Luis Galdames Bühler.



Acordada con el voto en contra del ministro señor Blanco, quien estuvo por acoger el recurso de queja teniendo en consideración los siguientes razonamientos:

1°.- Que, conforme al artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves

2°.- Que esta Corte ha ido precisando, por la vía de la jurisprudencia, los casos en que se está en presencia de una falta o abuso grave. Así, ha sostenido que se configura, entre otros casos, cuando se incurre en una falsa apreciación del mérito del proceso, circunstancia que se presenta en el momento que se dicta una resolución judicial de manera arbitraria, por valorarse de forma errónea los antecedentes recabados en las etapas procesales respectivas (Mario Mosquera Ruiz y Cristián Maturana Miquel, Los recursos procesales, Editorial Jurídica, Santiago, año 2010, p. 387). Asimismo si una determinada norma legal se ha interpretado sin atender a los principios que la informan.

En este sentido, es importante considerar que el concepto que introduce el artículo 545 del Código Orgánico de Tribunales, en orden a que el recurso de queja tiene por exclusiva finalidad corregir "faltas o abusos graves" cometidos en la dictación de resoluciones de carácter jurisdiccional, está íntimamente relacionado con el principio elaborado por la doctrina procesal de la "trascendencia", y que, en el caso concreto, dice relación con la necesidad de que la falta o abuso tenga una influencia sustancial, esencial, trascendente en la parte dispositiva de la sentencia. (Barahona Avendaño, José Miguel, El recurso de queja. Una Interpretación Funcional, Editorial Lexis Nexis, 1998, p. 40); situación que puede configurarse, por ejemplo, cuando por un incorrecto análisis de los antecedentes del proceso y de la normativa aplicable se priva a una parte del derecho a la tutela judicial efectiva.



3°.- Que del estudio de los antecedentes es posible observar que la decisión impugnada razona sobre el supuesto que la Ley N° 21.379, extendió la vigencia de la Ley N° 21.226 únicamente hasta el 30 de noviembre de 2021, fecha esta última en la cual cesó el régimen jurídico de excepción que la señalada ley estableció para los procesos judiciales, audiencias, actuaciones judiciales, plazos y ejercicio de las acciones que indica, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile, por lo que no estimaron razonable entender que un término pueda empezar a correr el mismo día en que la Ley que lo dispuso perdió su vigencia.

4°.- Que, a fin de resolver sobre la caducidad de la acción interpuesta, se debe considerar que el artículo 11 de la Ley N° 21.226 señala que, en cada una de las demás disposiciones en que se refiera a la vigencia del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, debe entenderse por tal al término que se extienden hasta el 30 de noviembre de 2021.

Por su parte, el artículo 8 inciso tercero de la Ley N° 21.226 establece que, en materia laboral, los plazos de caducidad se prorrogarán hasta cincuenta días hábiles contados desde la fecha de cese del estado de excepción constitucional de catástrofe.

5°.- Que uno de los principios fundamentales del Derecho del Trabajo y una de sus manifestaciones concretas, es el principio "*pro-operario*", respecto del cual la doctrina señala como manifestación fundamental la regla *in dubio pro-operario*, cuya aplicación resulta necesaria cuando frente a varias interpretaciones posibles de una norma, el juez debe seguir la más favorable al trabajador.

6°.- Que a la luz de la interpretación lógica de las normas conforme a la regla *indubio pro-operario*, debe entenderse que, para efectos de la ley, el cese del estado de excepción constitucional de catástrofe ocurrió el 30 de noviembre de 2022, y que los plazos de caducidad que señala el artículo del Código del Trabajo se prorrogarán hasta 50



días hábiles más, computados desde el 30 de noviembre de 2021.

Entender lo contrario implicaría destinar la norma restringiendo los derechos de los trabajadores, obviando los plazos de caducidad que contempla la legislación especial y vulnerando su espíritu, en cuanto lo pretendido fue dar un trato más favorable al ejercicio de la acción del trabajador.

Para los efectos pertinentes, comuníquese y hecho, archívese.

N° 44.004-2022.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Cristina Gajardo H., y los abogados integrantes señor Eduardo Morales R., y señora Leonor Etcheberry C. No firma el ministro señor Blanco y el abogado integrante señor Morales, obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con licencia médica el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.



En Santiago, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

